

## LUGAR COMÚN: LA CALLE

Los asesinatos de líderes, las torpezas de las guerrillas y el dedo estigmatizador de Álvaro Uribe hicieron que en la última década la protesta social haya dejado de tener el influjo exclusivo de la izquierda.

Marta Ruiz

*tamarindo34@hotmail.com*

Periodista, especializada en televisión y con maestría en estudios políticos. Ha trabajado en televisión y prensa, y durante los últimos siete años se ha desempeñado como editora de seguridad de la revista *Semana*, de Colombia. Publicó un libro de crónicas sobre jóvenes de Bogotá, y ha sido coeditora de varios libros y antologías.

En Colombia el nombre de Aída Quilcué era prácticamente desconocido hasta octubre de 2008 cuando estuvo cara a cara con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Unos 15.000 indígenas del pueblo Nasa habían salido el 12 de octubre desde Santander de Quilichao, en el Norte del Cauca con rumbo a Cali y Bogotá. Marchaban a un lado de la carretera Panamericana, seguidos de cerca por policías antimotines. No era la primera Minga o marcha masiva que hacían los indígenas de esta región, pero sí la más numerosa y contestataria. Buscaban resolver un viejo conflicto de tierras. Que el gobierno pusiera fin a las dilaciones para entregarles las tierras prometidas como reparación por la masacre de 20 indígenas cometida en la Hacienda Nilo en 1991. La reparación sólo se ha hecho a medias, pero las tierras buenas, las planas y regadas por ríos, siguen en manos de empresarios de la región. Ellos, como los campesinos que describió Juan Rulfo en “Nos han dado la tierra”, no quieren recibir baldíos agrietados por la sequía, que tantas veces les han ofrecido.

La protesta también era simplemente para decirle al Presidente Álvaro Uribe que ellos no estaban con él. Que la política de seguridad democrática,<sup>1</sup> que tantos réditos le había dado al gobierno, para los indígenas había significado militarización y muerte. Los indígenas sólo iban armados con bastones de madera, que se han convertido en un símbolo del pacifismo y la resistencia de estas comunidades. Pero de repente, antes de llegar a Cali, se armó una batalla campal con la policía. Del lado de los manifestantes salieron a volar por los aires pequeños explosivos conocidos como “papas bombas” que hirieron a varios uniformados. La policía disparó y mató a tres indígenas. Y ahí fue Troya. La refriega en la finca La María, donde estaban acampando los indígenas fue brutal. Hubo destrucción, contusiones, gritos y un desorden que tuvo eco en todo el país, incluso en Bogotá, donde los medios estaban completamente absortos en los temas de “alto turmequé” político, como las mañas que se estaba dando Uribe para buscar una segunda reelección, o los escándalos de corrupción que tenían en vilo al país, como la para-política, nombre que se le ha dado a las investigaciones que adelanta la justicia contra más de un centenar de congresistas, gobernadores y alcaldes, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. El 23 de octubre, un día después de la batalla campal, Uribe hizo una alocución presidencial en la que tuvo que rectificarse y reconocer que “la policía sí disparó” aunque no reconoció que esas balas hubiesen causado las muertes de los indígenas. Y no escatimó tiempo para calificar a la marcha de los indígenas como un movimiento “infiltrado por los terroristas de las Farc”.

<sup>1</sup> La Política de Seguridad Democrática fue la columna vertebral del gobierno de Álvaro Uribe y consistió en una agresiva recuperación del control territorial en regiones de influencia guerrillera. Por cuenta de esta política se duplicó el pie de fuerza y se modernizó el aparato militar.

Los ánimos se caldearon y la protesta se radicalizó. Lo único que querían los indígenas era una reunión con el Presidente: un cara a cara, entre él y la multitud. Pero el 27 de octubre, cuando todo parecía listo para el encuentro, Uribe no llegó. O mejor, llegó tarde y los indígenas no lo recibieron. Cinco días después se produjo el encuentro. Aída Quilcué, investida de toda la autoridad, con su sombrero blanco, un pañuelo al cuello, y una elocuencia poco común, encabezó los discursos, mientras los indígenas la vitoreaban de tanto en tanto. Otros líderes pasaron al micrófono mientras medio país seguía de cerca el peculiar encuentro, que Uribe escuchó estoicamente.

Los indígenas no pedían nada, en el sentido que los gobiernos están acostumbrados a lidiar en las protestas. No había pliego de peticiones, ni comisión negociadora. La única petición era que el Estado cumpliera con sus obligaciones, y ser escuchados en su rechazo a Uribe y todas sus propuestas. Era un debate político, público y horizontal. Un acto de resistencia. No más.

Pocas semanas más tarde, Quilcué recibió uno de los golpes más duros de su vida. Su esposo, Edwin Legarda, murió acribillado en un retén del Ejército, en un oscuro episodio que las Fuerzas Armadas justifican porque supuestamente el carro no se detuvo ante la orden de parar, y que los indígenas consideran fue una retaliación. “Uribe no me perdonó mis palabras” dijo Quilcué pocos días después de enterrar a su esposo.

La Minga del 2008 encarnó todas las paradojas y problemas, aprendizajes y debates de la protesta en Colombia. El fantasma de la guerrilla, el estigma del gobierno y de sectores del establecimiento, la violencia, y finalmente, la creciente politización de las demandas del movimiento social, que según lo han demostrado estudios recientes, se han concentrado en la exigencia de derechos y la aplicación de políticas.

No es exagerado decir que hace por lo menos tres lustros los indígenas de Colombia reinventaron la protesta social. El pueblo Nasa fue quizá el primer movimiento que, sin renunciar al uso de la lucha directa y radical, contestataria y reivindicativa, se deslindó de las guerrillas. Y aunque en la era Uribe no hubo una sola protesta que no fuera catalogada de “terrorista” o de tener infiltrados o ser alentadas por “terroristas”, en realidad las evidencias demuestran todo lo contrario: que la guerrilla ha perdido la capacidad de movilización social que otrora tuvo, especialmente en zonas campesinas y de colonización, y que si en Colombia la protesta social está viva y coleando, es a pesar del daño tan grande que le han hecho la guerra sucia, la manipulación e injerencia de los grupos armados, y la intolerancia del Estado.

Según el Banco de Datos de Luchas Sociales y de Acciones Colectivas por la Paz, del CINEP –Centro de Investigación y Educación Popular–, durante el gobierno Uribe se produjeron dos protestas cada día, uno de los índices más altos de las últimas décadas. Lo que también pudieron constatar los investigadores, es que lo que ha cambiado profundamente son los actores, las demandas, y las formas de protesta. Los actores han cambiado porque mientras los sindicatos, los movimientos urbanos

y los estudiantes están de capa caída, los movimientos de víctimas, los indígenas y las mujeres tienen una mayor iniciativa. Las banderas son otras. Se pasó de la reivindicación a las demandas políticas de derechos humanos, en protesta a medidas gubernamentales o de conmemoración. Resulta revelador que según el CINEP el 28,3% de las protestas durante la era Uribe se hicieron en contra del gobierno nacional, pero en el segundo lugar, con 15,5%, las protestas se encaminaron contra los grupos armados.

*“Protesta hay todos los días, pero lo sorprendente es que ahora los medios no las registran. El tiempo por ejemplo se ha convertido en el depositario del silencio”* dice con desconsuelo Álvaro Delgado, uno de los investigadores del CINEP.

Delgado es un hombre de 80 años, curtido en las lides de las luchas populares y ex militante comunista. Hace más de 20 años les dijo a sus camaradas hasta el cansancio que la combinación de todas las formas de lucha, o ese amancebamiento infeliz entre organizaciones legales y guerrilla, llevaría por el despeñadero al movimiento social y de paso, a los comunistas. Lo escucharon porque sabían que, al fin y al cabo, Delgado era un hombre histórico dentro del Partido, y había dedicado media vida a observar las protestas sociales. Desde los años 60 llevaba con esmero un registro detallado de las huelgas y movimientos de los trabajadores, a veces a mano, en pequeñas fichas bibliográficas, o a máquina, con cuatro copias de papel carbón. Conocía a toda la dirigencia obrera de la agroindustria bananera de Urabá, a los sindicalistas del petróleo de Barrancabermeja, a los maestros de todo el país. Donde había ebullición social, allí estaba Delgado y por eso sabía de lo que estaba hablando. Sus camaradas no le dijeron nada. Lo ignoraron y poco a poco lo hicieron a un lado, le negaron la posibilidad del debate o de cualquier respuesta a la controversia que les estaba planteando.

Hoy, más de 20 años después, muchos lo ven como un visionario. Como estudioso que es del sindicalismo puede decir con certeza que durante la era Uribe las huelgas se redujeron en un 75%. Los sindicatos ya no son ni sombra de lo que eran. Él lo explica por varias razones: por un lado las reformas estructurales de los años 90 y la ley de flexibilización laboral, que es del gobierno Uribe, le dieron un golpe de gracia al empleo formal, y de paso, a las organizaciones de los trabajadores. Los puestos fueron reemplazados masivamente por contratistas o por cooperativas de trabajo asociado.

Estos cambios también implicaron que los sindicatos fueran cada vez más un espacio de defensa de logros pasados, y menos de reivindicaciones de las comunidades en general. *“Hay que ver la crisis de Fecode, el sindicato de los maestros”* dice Delgado, quien cree que éste cometió un error histórico al negarse a dar el debate sobre la calidad de la educación, que es una necesidad sentida de la población. Adicionalmente, según Delgado, muchos sindicatos terminaron convertidos en maquinarias electorales, cuyo objetivo es tener un parlamentario.

Algo similar describe un ex sindicalista de la Unión Sindical Obrera, USO, que durante años fue la combativa organización de los trabajadores petroleros, y que

lograba movilizar a toda una ciudad, como Barrancabermeja, alrededor de sus huelgas. La última gran huelga que ellos hicieron fue en 2004, cuando se opusieron a la privatización de Ecopetrol. Un objetivo político que no lograron.

Rafael Gómez, ex dirigente de esa organización reconoce que la USO perdió credibilidad entre la comunidad porque se creó una división social entre quienes trabajaban en Ecopetrol y quienes no lo hacían. El sindicato orientó muchos esfuerzos a mantener las conquistas laborales de los suyos y dejó de lado las reivindicaciones del resto de la población. Pero también admite que *“si hubo algo negativo para el movimiento social fue el influjo de las guerrillas”*. Se refiere a varios incidentes de protestas convocadas por el sindicato, donde la gente solía hacer barricadas o incluso tener refriegas con la policía, pero que eran protestas desarmadas. Hasta que milicianos empezaron a meterse en medio de estas luchas urbanas, y terminaron por espantar a la gente del común, que no quería terminar herida o en la cárcel. Incluso varios dirigentes de la USO estuvieron investigados judicialmente por presuntos vínculos con la insurgencia que nunca les fueron probados.

Uribe optó por militarizar las refinerías y en general toda la industria petrolera, especialmente la de Barrancabermeja. *“Metieron un batallón energético a las instalaciones. Ahora hay más soldados que empleados”* dice Jorge Gamboa, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. Gamboa recuerda que justamente en 2004 los sindicalistas descubrieron que desde la oficina de seguridad de la refinería, los estaban filmando de manera clandestina cuando hacían sus mítines, y que el jefe de seguridad de esa instalación, un oficial del ejército retirado, tenía datos con las direcciones y familias de los principales dirigentes sindicales. El hecho no tendría trascendencia si no fuera porque a la USO le han matado 25 de sus miembros, y si las principales ciudades donde se produce petróleo no estuvieran, para la época, atestadas de paramilitares, muchos de los cuales, 1.300 según Gamboa, entraron a trabajar en la empresa después de la desmovilización.

Pero si las políticas laborales y la incidencia de las guerrillas han afectado en ciertos sectores y lugares las protestas de los trabajadores, la violencia paramilitar –y en muchas ocasiones también oficial– ha sido el factor más fuerte en su contra. Colombia tiene uno de los mayores índices de asesinatos de sindicalistas en el mundo y aunque en los años recientes estas cifras han bajado, el daño para el movimiento sindical, ya está hecho. Al respecto no faltan las controversias.

A finales del 2009 el profesor Daniel Mejía, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, publicó un estudio en el que demuestra que la tasa de asesinatos de sindicalistas es seis veces menor que la de los colombianos en general. Es decir, que la actividad sindical no es necesariamente más riesgosa que cualquier otro oficio, si se ejerce en Colombia. Entre sus presunciones es que muchas de estas muertes no tienen que ver con el oficio sindical, ni con la protesta social como tal. Algo que sólo se podría corroborar con la resolución de las investigaciones judiciales.

Actualmente hay 19 fiscales, 92 investigadores y tres jueces que están dedicados de manera exclusiva a investigar los asesinatos de sindicalistas. En los últimos tres años se han esclarecido más de 150 casos, muchos de ellos gracias a las declaraciones de los paramilitares desmovilizados cuyos testimonios han demostrado que en muchas regiones sí hubo una campaña deliberada para matar sindicalistas y por esta vía intimidar a los trabajadores y disuadirlos de la protesta social.

Es lo que por lo menos dejan claras las declaraciones que ante los fiscales dio el ex jefe paramilitar Ever Veloza, HH, antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Sólo en un año, entre 1995 y 1996, HH reconoció haber asesinado a 18 dirigentes del sindicato bananero Sintrainagro, en la región de Urabá. Con esta estrategia los paramilitares lograron, literalmente, doblegar al sindicato, erradicar la influencia de la izquierda en sus filas, y mantenerlo bajo control en una región que ha estado bajo su régimen de terror ya casi por dos décadas.

Algo similar se presentó en el Cesar, con la macabra alianza de algunos altos funcionarios de la minera Drummond y los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40 –hoy extraditado en Estados Unidos– detalles que se han conocido en un difícil y accidentado proceso judicial.

A finales de los 90 Veloza repitió su estrategia de exterminio en el Valle, con los ingenios azucareros, según él mismo, en concertación con algunos dueños de las plantaciones que buscaban liquidar cualquier intento de protesta para mejorar salarios o mejores condiciones de vida.

Justamente una de las protestas que más enfureció a Uribe, junto a la de los indígenas, fue la huelga de 12.000 corteros de caña que duró más de dos meses y dejó pérdidas superiores a los 150.000 dólares en un sector que recibió todo tipo de subvenciones y subsidios del gobierno. En el tiempo, la huelga coincidió con la Minga indígena, y aunque sus peticiones eran muy concretas, la protesta dejó al desnudo el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado que estaban incumpliendo los mínimos derechos laborales. Dado que la organización sindical en este sector había sido tan golpeada por la violencia, el ministro de Protección Social de ese entonces, Diego Palacio, dijo ante el Congreso de la República que: *“el paro es organizado por las fuerzas oscuras de la subversión”*. De hecho, la Fiscalía inició investigaciones para indagar por el origen de amenazas contra quienes no estaban participando en la huelga. Pero se trataba más de una estrategia de deslegitimación del gobierno que de una realidad. Que hubiese fuerzas de la guerrilla apoyando el paro, pocos lo dudan. Pero que un grupo insurgente fuera capaz de organizar y mantener un paro de esa magnitud, es algo que las guerrillas colombianas no están en capacidad de hacer en este momento, y quizá nunca han tenido una incidencia en la clase trabajadora como para lograrlo.

La gran paradoja de Uribe es que al final de su segundo gobierno –que empezó en 2006– la protesta sindical había crecido. La Escuela Nacional Sindical de Medellín,

que hace un juicioso seguimiento a la protesta de los trabajadores, se sorprendió al encontrar que en 2009 hubo un incremento de las movilizaciones, lo que puso a este año entre los más activos de las últimas dos décadas. En su base de datos se registraron 103 eventos entre huelgas y otro tipo de protesta. Lo nuevo es que la mayoría fueron contra políticas laborales, y que tienen más incidencia las de orden local, y menos las de orden nacional. Lo que ratifica el hallazgo del CINEP en el sentido de que la protesta es ahora más política. Pero también más invisible.

## Por una capucha

Carlos Ossa Escobar es conocido en el país como un liberal sin reatos. Hace casi 20 años, cuando era directivo del Banco de la República cuando la policía en una requisa en un aeropuerto le encontró su dosis personal de marihuana, la cual él defendió sin pudores. En 2009, como rector de la Universidad Distrital, tuvo que enfrentar un debate público muy controvertido alrededor de los estudiantes encapuchados que con frecuencia hacen propaganda en las aulas, o que directamente incitan a protestas violentas con piedras y explosivos menores.

La entonces senadora Gina Parody abrió la controversia cuando exhibió unos videos de encapuchados que agitaban en varias universidades como prueba de la infiltración guerrillera en las mismas. Para Parody capucha era prácticamente sinónimo de fusil. Pero para Ossa no. En una controvertida carta dijo que *“usar una capucha no es ilegal ni subversivo”* por el contrario el rector, que recibió el respaldo de otros rectores, dijo que la capucha era fruto del miedo que sentían algunos jóvenes de expresar sus pensamientos y la desconfianza en las instituciones.

Las formas de protesta de los estudiantes universitarios, alrededor de debates como el presupuesto o la reforma académica, son mayoritariamente pacifistas y simbólicas, aunque a veces adquiere visos radicales. Este año una asamblea de estudiantes de la Universidad Nacional decidió abandonar el auditorio donde desarrollaba una asamblea y requería al Rector, para impedir que este saliera del campus en su carro. Durante casi dos horas el auto con el funcionario adentro estuvo rodeado de centenares de jóvenes que le negaron la salida. Fue necesaria la mediación de la Defensoría del Pueblo y el episodio se convirtió en un debate nacional cuando el presidente dijo que acusaría de secuestro a los estudiantes. Las vías de hecho se han usado con frecuencia en las universidades y cada vez más se le trata como “terrorismo”. Pero la protesta radical de los estudiantes no necesariamente está asociada a la insurgencia. O no sólo a ella. Hay grupos radicales que también usan la violencia, sin ser ésta de carácter político sino más bien una manifestación de rasgos anarquistas, como se ha visto en universidades como la Nacional de Bogotá o de corte delincencial, como la que se ha expresado en la Universidad de Antioquia, azuzada por los expendedores

de droga. Pero así como no toda protesta estudiantil es motivada por las guerrillas, sin duda estas sí hacen presencia en la Universidad, y quizá con más fuerza que en años anteriores, lo que ha debilitado al movimiento mismo.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con el profesor Miguel Ángel Beltrán. Sociólogo que realizaba su posdoctorado en México, fue deportado de este país como miembro de las FARC y ha tenido que enfrentar unas difíciles condiciones carcelarias ya que a pesar de no estar acusado de ningún crimen, permanece semi-aislado en una cárcel de máxima seguridad. Beltrán es un hombre de izquierda, de quien muchos colegas en la Universidad dudan sea capaz de tomar un arma. Sin embargo, ha sido activo en el apoyo al movimiento de los estudiantes. De hecho, la policía lo señala como alguien que recluta jóvenes en las universidades, sin que haya pruebas contundentes de ello. Las pruebas están encaminadas sobre todo a probar que él obedecía orientaciones de las FARC, bajo un seudónimo que reposa en correos hallados en el ordenador de Raúl Reyes, jefe de la guerrilla muerto en el bombardeo de Angostura, Ecuador. El 1 de marzo de 2008 el gobierno colombiano atacó con bombas de alta precisión el campamento de Reyes, que estaba en territorio ecuatoriano. La violación de la soberanía de ese país generó una crisis política en toda la región y aisló a Colombia de sus vecinos. El gobierno de Uribe, sin embargo, usó la información hallada en el campamento para una fuerte campaña mediática para legitimar su acción y exponer públicamente los vínculos entre algunos políticos de estos países y las Farc. En el acervo probatorio reposan una serie de intervenciones públicas de Beltrán, donde expresa simplemente sus opiniones sobre el conflicto colombiano. Aunque el caso de Beltrán ha desaparecido de los medios, un seguimiento detallado de su proceso deja entrever que sí hay una intención política en su detención. “Mi detención es una violación a la libertad de expresión” dice él. Mientras miembros de los comités que trabajan por su libertad afirman que lo que buscaba el gobierno era dar un golpe moral fuerte al movimiento universitario, y demostrar cuánto control policial hay dentro de las universidades.

## Todo lo sólido se desvanece

La violencia guerrillera, así como el espionaje oficial y el estigma permanente durante la era Uribe, han hecho que las organizaciones tradicionales, acostumbradas a manifestarse con marchas, enarbolando un pliego de peticiones y en contra de algo (o de todo), hayan sido desplazadas en el terreno nacional y de los grandes eventos por otras con reivindicaciones más políticas, y formas de expresión modernas, menos densas.

Quizá el hito más importante en la nueva movilización ha sido el de las marchas contra el secuestro. El 4 de febrero de 2008 un aparente espontáneo grupo de muchachos convocó por Facebook a una manifestación para exigirle a las FARC la

liberación de los secuestrados. Acababan de publicarse las pruebas de supervivencia de Ingrid Betancourt, que parecía famélica y moribunda, y de varios soldados y policías, que llevaban una década en la selva, atados por cadenas en el cuello. La indignación por estas imágenes venía creciendo desde que las mismas FARC fusilaron a 10 diputados del Valle que estaban cautivos desde un lustro atrás. Y con el espectáculo de la fallida liberación del niño Emmanuel, hijo de Clara Rojas, a quien las FARC ni siquiera tenían en su poder cuando pusieron al país en vilo por su libertad.

La marcha terminó siendo auspiciada por amplios sectores, pero especialmente los grandes medios, empresarios y gobierno, pero también ciudadanos comunes. Ese día se calcula que cerca de 6 millones de personas salieron a las calles, vestidos de blanco, agitando banderas contra el secuestro. Es la movilización más grande de que se tenga memoria en Colombia y no fue para darle respaldo a alguna bandera de la guerrilla sino todo lo contrario: para protestar en su contra. Algo que ningún izquierdista hubiera imaginado ni en sus peores sueños. Al mes siguiente un grupo de organizaciones afines a la izquierda convocó una segunda marcha, esta vez para reivindicar a las víctimas de los paramilitares y del Estado. Menos nutrida que la anterior, esta marcha sin embargo también contó con el concurso de muchas personas y sectores. Obviamente el gobierno no acogió la convocatoria, pues era contra el Estado, y desde la orilla oficial se escucharon varios señalamientos de que esta era una marcha promovida por las FARC.

Este tipo de movilizaciones, así como las que han hecho las víctimas de la violencia, las mujeres y los sectores que enarbolan causas sexuales o ambientales han cambiado el panorama de la protesta, y la han divorciado por completo de los actores del conflicto armado que estuvieron tanto tiempo anclados en las organizaciones sociales, tratando de influirlas u orientarlas. También han desplazado su protesta a lugares diferentes a la plaza pública. El recinto del Congreso por ejemplo, o los Tribunales. *“Precisamente ese ascenso de fuerzas sociales de rostro alegre y conductas incluyentes, en vez de pugnaces, debería servir de lección para los sindicatos, porque las mayores movilizaciones contra la guerra y por la paz han sido adelantadas y promovidas por esas nuevas fuerzas, los sindicatos han sido incapaces de vencer el diablo de la polarización”* dice Delgado en su ensayo “La protesta social y la guerra no se quieren”.

Es así como la protesta actual en Colombia ha terminado por ser una especie de serpiente que se muerde la cola. La cabeza son los indígenas, que desde una propuesta pacifista radical, y una sólida organización se han convertido en un referente para el país. Y la cola son las manifestaciones virtuales, que sacan a la gente a la calle, no tienen organización y no perduran, pero que logran incluir a quienes no sabían qué diablos era cargar una pancarta.

Bogotá, septiembre 30 de 2010

## Fuentes

Todo tiempo pasado fue peor. Álvaro Delgado. La carreta social, Primera Edición abril de 2007, Medellín, Colombia.

25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000. Mauricio Archila y otros. CINEP, marzo de 2003.

Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990 Mauricio Archila. Icanh, cipen 2003.

Documento CEDE número 28, noviembre de 2009

Revista Foro 67 de abril de 2009

Entrevistas a: Rafael Gómez, Jorge Gamboa, Álvaro Delgado, cuestionario a Miguel Ángel Beltrán.

Notas de entrevistas pasadas a: Aida Quilcué, Luciano Sanín, Carlos Ossa.